

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN GALICIA

Estela San José Asensio

Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 6 de Lugo

Resumen: Tan antiguo como la propia Humanidad, consecuencia de una concepción androcéntrica de la sociedad, el fenómeno de la violencia de género ha comenzado a ser combatido en épocas muy recientes por las normas nacionales e internacionales. Se pretende con este artículo analizar su origen, sus características y sus consecuencias y cuál ha sido y es su tratamiento legal. La ley gallega específica en la materia es uno de los últimos pasos en la lucha contra esta lacra y contiene importantes avances en la materia.

Palabras clave: Violencia de género, maltrato, legislación gallega

Abstract: So ancient as Humanity, consequence of an androcentric conception of the society, the gender violence has begun recently to be combated through national and international regulations. This article analyzes the origin, the characteristics, the consequences and the legal treatment of this problem. The Galician specific law in the matter represents one of the last steps in the fight and contains important advances.

Keywords: Gender violence, mistreatment, Galician law

I. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Según la OMS: “Para las mujeres de 16 a 44 años, la violencia doméstica es la principal causa de muerte e invalidez, por encima del cáncer, los accidentes automovilísticos y aún la guerra”.

No puede afrontarse el análisis de la violencia de género en un determinado territorio partiendo de la idea de que tiene características propias que le hacen diferente respecto a la violencia de género en el resto del Estado o del Mundo en general.

Lamentablemente, la violencia de género es un fenómeno que por definición está y ha estado presente en todo tiempo, sociedad y cultura.

Las diferencias son de tratamiento legislativo y en los propios medios y recursos humanos y materiales que dependen del propio juego competencial dibujado por la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y las leyes estatales y autonómicas.

Para poder analizar ese tratamiento, esa diferenciación, ha de partirse del panorama general, de una visión amplia que nos permita comprender qué es la violencia de género, cuál es su origen, su evolución social y jurídica, y los efectos.

Pocos temas en la actualidad están siendo tan debatidos como la violencia de género. Son tristemente frecuentes las noticias de nuevos asesinatos, homicidios o lesiones a mujeres a manos de los que son o han sido sus parejas, que generan un debate social y jurídico que busca denodadamente solución para ello. La violencia de género, como se irá viendo, es un problema implícito en nuestra sociedad, con graves consecuencias no solo para quien la sufre directamente sino para todos y cada uno de los que vivimos en ella, ya sea a título individual o ya sea como colectivo.

Muchos sectores sociales reivindican con gran acierto un debate sobre la violencia de género, un análisis pormenorizado que pasando por la búsqueda de su origen y llegando al conocimiento

de sus consecuencias, permita encontrar la solución más o menos eficaz para acabar con aquella.

Pues bien, para un correcto análisis de este fenómeno se hace preciso establecer qué se entiende por violencia de género, cuestión que como veremos no es baladí al encontrarse aún a día de hoy, grandes errores en la conceptualización, confusiones con otros fenómenos similares y cercanos pero perfectamente diferenciables.

Y como no podía ser de otra forma, incluso en cuanto al término a emplear ha surgido y subsiste la controversia. No se utiliza de manera unánime la expresión violencia de género para aludir al fenómeno que subyace sino que en ocasiones se sustituye por “violencia machista” (como sucede en el articulado de la Ley Gallega que versa sobre esta materia), “violencia sobre la mujer” e incluso “Terrorismo familiar”.

Los primeros problemas nacen desde la exportación del término “género” del inglés “*gender*” que significa “sexo”. No son dos cuestiones idénticas el sexo y el género.

El sexo alude a las diferencias biológicas entre hombre y mujer mientras que el género va un paso más adelante, engloba o alude a otras realidades, sirve de fundamento para poder explicar que las desigualdades entre el hombre y la mujer se han sustentando y construido históricamente sobre la estructura familiar patriarcal, sobre la concepción androcéntrica de la sociedad y no como fruto de las diferencias lógicas derivadas de la biología. El sexo es una atribución genética y el género, en palabras de Amelia Valcárcel, es una atribución social que se aprende en el proceso de socialización y por tanto es modificable¹.

Con independencia de la terminología, no pueden confundirse como sucede muy habitualmente, la violencia doméstica con la violencia de género por tener origen, desarrollo y efectos diferentes.

1 Vid. A. Valcárcel, *Sexo y filosofía: sobre “mujer” y “poder”*, Barcelona, 1991, pp. 43 y ss; misma autora, *Del miedo a la Igualdad*, Barcelona, 1993, pp. 36 y ss.

A la confusión ordinaria, que se encuentra con indeseable frecuencia en foros públicos, y por supuesto, en los medios de comunicación, se añade la propia confusión legislativa, y es que en ocasiones, como en la propia ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral de las víctimas de violencia de género, el ámbito de aplicación restringe en demasía a este fenómeno, circunscribiéndolo o sometiéndolo a al requisito de una relación de afectividad, aún vigente o ya extinta.

La violencia doméstica en un sentido amplio comprendería cualquier acción u omisión vejatoria o similar de uno o varios miembros de la familia contra otros. Y ello con independencia del sexo o posición en la familia que tengan agresor y víctima.

Si la víctima es, en un sentido ya más restringido, esposa o mujer con la que el agresor tiene o ha tenido una vinculación, ya sea matrimonial o de afectividad análoga al matrimonio, estaremos ante la violencia de género. Es decir, aquí la clave no está tanto en el cuadro lesional, en las lesiones que sufre la víctima, sino en las circunstancias que rodean a la pareja, en los roles y actitudes con los que juega el agresor y le son impuestos a la víctima, viene caracterizada por tanto por la propia posición del hombre como tal frente a la mujer, por lo que significa el ser “hombre” y la consiguiente subordinación por ser “mujer”.

Este es el punto de vista de la legislación específica estatal, pero no en la autonómica y en el ámbito internacional donde no solo existirá violencia de género cuando se dé de fondo la relación de afectividad, sino que se hace énfasis o hincapié en la relación de subordinación de la mujer al hombre, por el mero hecho de serlo, por estar en una posición inferior jerárquica, laboral, social, docente, etc., esto es, ya se dé en la vida pública o en la privada.

Desde cualquiera de las dos perspectivas, en ese entramado, el hombre por el mero hecho de serlo, ocupa en la sociedad, en las distintas estructuras que la integran, y sobre todo en la familiar un papel predominante, está dotado de una serie de facultades y derechos que le son innatos por haber nacido con tal sexo,

atribuciones que ha aprendido y que sustenta con los medios que tiene a su alcance. Así la fuerza, la capacidad que tiene ésta para imponer y obligar se vuelve protagonista, es el medio idóneo no ya para imponer el rol sino también para mantenerlo. La dignidad masculina emplea la fuerza, utiliza ese medio para sustentarse y para demostrar que quien sufre la violencia no la posee. El fin último es el mantenimiento de una distribución desigual y jerarquizada de los valores de la sociedad, valores que se atribuyen según el sexo de su poseedor.

Nuestra sociedad se asienta sobre una conceptualización del hombre como ser dotado de una serie de atribuciones implícitas en su dignidad de las que carece la mujer y contra la corriente cada vez más fuerte de terminar con esa desigualdad, con esas diferencias ilógicas y trasnochadas, la fuerza, la violencia, surge como garantía de su mantenimiento.

Las raíces de la violencia de género se encuentran en las propias normas de la sociedad, en unas normas culturales que han permitido que la violencia siga siendo una realidad, normas culturales que podrían integrar el concepto del “sexismo”, origen último de aquella.

Numerosos estudios, como el de las profesoras Victoria Ferrer Pérez y Esperanza Bosch Fiol², que analizan el trabajo de autores como Glick y Fise (1996) y Expósito, Moya y Glick (1998) distinguen entre el sexismo hostil y el sexismo benevolente, o lo que es lo mismo, el viejo y tradicional sexismo y el sexismo más actual, sutil, moderno, que se materializa en la propia negación de la discriminación que padecen las mujeres, en el antagonismo hacia las demandas de las mujeres o en la falta de apoyo a las políticas diseñadas para ayudarlas.

Así el sexismo hostil sería una actitud, prejuicio o estereotipo y conducta discriminatoria, negativa, basada en la supuesta

2 Cfr. V. Ferrer Pérez / E. Bosch Fiol, “Violencia de género y misoginia: reflexiones psicosociales sobre un posible factor explicativo”, en *Papeles del Psicólogo*, nº 75, 2000, p. 31.

inferioridad de las mujeres como grupo que se articularía en torno a las siguientes ideas:

- 1.- Un paternalismo dominador.
- 2.- una diferenciación de género competitiva.
- 3.- Una hostilidad heterosexual.

El sexismo benévolo es el conjunto de actitudes interrelacionadas hacia las mujeres que son sexistas en cuanto a que las consideran de forma estereotipada y limitadas a ciertos roles, ideas que pueden tener cierto tono afectivo que es percibido de manera menos negativa. Sus componentes o características serían:

- 1.- El paternalismo protector.
- 2.- La diferenciación de género “complementaria”, esto es, considerar que el hombre cuida y protege a la mujer como un padre.
- 3.- La intimidad heterosexual, es decir, la dependencia diádica de los hombres respecto a las mujeres que son quienes crían a los hijos de los hombres y satisfacen sus necesidades sexuales.

Ambos sexismos siguen latentes en la Humanidad si bien, el primero de ellos está limitado a las sociedades más ancladas en el pasado, las menos evolucionadas socialmente, mientras que el segundo está presente en la práctica totalidad de las culturas y países, incluso en el nuestro.

La concepción androcéntrica del hombre ha estado presente en toda cultura, religión, época o ámbito, y ha sido preconizada desde los lugares de mayor predominio e influencia. Este sexismo, ya hostil o ya benévolo, ha sido proclamado sin pudor alguno por las voces calificadas de precursoras.

Y aunque los avances han sido muchos, siguen existiendo huellas y vestigios lamentables y deleznable de los ejemplos que destacaremos a continuación.

El Código de Hamurabi, considerado por la comunidad científica como el primer compendio de normas que se conoce

en la Humanidad, dictado por el Rey Hamurabi bajo “la inspiración divina” para Babilonia, en el siglo XVII a.C, proclamaba “cuando una mujer tuviera una conducta desordenada y dejara de cumplir sus obligaciones del hogar, el marido puede someterla y esclavizarla. Esta servitud puede incluso ejercerse en la casa de un acreedor del marido y, durante el período en que durara, le es lícito (al marido) contraer nuevo matrimonio”.

Recuerda esta norma a la legitimidad que aún en la actualidad se da en países como Turquía y Pakistán a los llamados crímenes de honor, delitos que están exentos de pena en mayor o menor grado, ya que la muerte de una mujer a manos de los varones de su familia ante la horrible conducta de aquella de negarse a contraer matrimonio con el elegido, ha de ser reprendida con su óbito. Y qué decir sobre el uxoricidio ante el terrible delito del adulterio de la mujer, apenas penado en nuestro sistema penal hasta mediados del siglo pasado, y en vigor en cuanto a su exención de pena en países como Perú, Sudán, Turquía, Pakistán y un largo etcétera.

En el s. XIV se publica Le Manegier de París, un Tratado de conducta moral y costumbres de Francia que dispone “cuando un hombre fuese reprendido en público por una mujer, tiene derecho a golpearla con el puño, el pie y romperle la nariz para que así, desfigurada, no se deje ver, avergonzada de su faz, y le está bien merecido, por dirigirse al hombre con maldad y lenguaje osado”.

Enrique VII, Rey de Inglaterra proclamó en el s. XVI que “los niños, los idiotas, los lunáticos y las mujeres no pueden y no tienen capacidad para efectuar negocios”.

El Código de Napoleón en 1804 proclamaba la incapacidad legal de la mujer y nuestro código civil, bebiendo sus fuentes de aquel y recogiendo el propio sentir social, proclama hasta la reforma de la ley 14/75 de 2 de mayo el deber de obediencia de la esposa respecto al esposo, la representación legal de aquella por éste, y la exigencia de la licencia marital para cualquier acto de

relativa importancia, como el abrir una cuenta corriente o firmar un contrato laboral.

En el s. XVII, la Constitución Nacional Inglesa recogía entre sus disposiciones que “todas las mujeres que sedujeren y llevaran al matrimonio a los súbditos de Su Majestad mediante el uso de perfumes, pinturas, dientes postizos, pelucas y relleno en caderas y pechos incurrirían en delito de brujería y el casamiento quedará automáticamente anulado”.

A esto nos referíamos al hablar del sexismo hostil y más concretamente a su característica de la hostilidad heterosexual, se ve a la mujer como algo pernicioso para el hombre.

La religión no podía ser distinta en este aspecto. Los profetas, apóstoles y emisarios de la Divinidad en todas y cada una de las religiones hicieron gala de su concepción del Mundo:

Zaratustra, en el s. VII a. C decía “la mujer debe adorar al hombre como a un dios. Cada mañana debe arrodillarse nueve veces consecutivas, a los pies del marido y con los brazos cruzados, preguntarle. ¿Señor, qué deseáis que haga?”.

Las leyes de Manu que forman el Libro Sagrado de la India recogían que “aunque la conducta del marido sea censurable, aunque éste se dé a otros amores, la mujer virtuosa debe reverenciarlo como a un dios. Durante la infancia una mujer debe depender de su padre, al casarse de su marido, si éste muere, de sus hijos y si no los tuviera, de su soberano. Una mujer nunca debe gobernarse a sí misma”.

El Corán, del s. VI, libro sagrado en la actualidad aún seguido al pie de la letra por millones de fieles, no duda en recoger como palabra de su Dios que “los hombres son superiores a las mujeres porque Alá les otorgó primacía sobre ellas. Por tanto dio a los varones el doble de lo que dio a las mujeres. Los maridos que sufrieran desobediencia de sus mujeres pueden castigarlas, abandonarlas en sus lechos e incluso golpearlas”.

San Pablo, en el año 67 d. C dijo “que las mujeres estén calladas en las Iglesias, porque no les es permitido hablar. Si

quisieran ser instruidas sobre algún punto, pregunten en casa a sus maridos”.

Todo ello podría considerarse como un anecdotario si la realidad histórica y actual no hubiera y siguiera demostrando que tales concepciones, tales afirmaciones y consejos u órdenes de conducta han tenido y tienen una vigencia plena. Traslucieron a los grandes textos, a las grandes revoluciones, permaneciendo intactas, como si los grandes avances no tuvieran incidencia sobre ello.

El mejor de los ejemplos lo encontramos en la Revolución Francesa. Estudiada como un acontecimiento que marcó un antes y un después en la Historia de la Humanidad, no solo no afectó en absoluto a la concepción androcéntrica de la sociedad sino que vino a reforzarla.

La famosa y “venerada” Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada el 26 de julio de 1789 rechazó de manera explícita y voluntaria la inclusión de las mujeres y de una igualdad que las presentara como a los hombres por considerar a la mujer “desprovista de razón”, justificándolo en que solo una minoría de mujeres excepcionales no podían llevar a la generalización. La igualdad, fraternidad y legalidad no iba con ellas. Nacer mujer no significaba lo mismo que nacer hombre y ciudadano, no se entendía que las desigualdades históricas, la privación arbitraria de derechos y posibilidades basadas en el sexo fuera tan injusta y antinatural de raíz como la basada en el origen social.

Ante ello, Olympe de Gouges en 1791 materializó en oposición a tal injusticia una redacción alternativa que se plasmó en los Derechos de la Mujer y la Ciudadana que recogía que “el ejercicio de los derechos naturales de la mujer tiene por único coto la perpetua tiranía que le opone el hombre. Esos cotos tienen que ser reformados por las leyes de la naturaleza y de la razón”³.

3 La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana comenzaba con las siguientes palabras: “Hombre, ¿eres capaz de ser justo?. Una mujer te hace esta pregunta”.

Tal afirmación aún hoy puede ser expresión de la realidad, en algunas sociedades y ámbitos con total crudeza, y en otras de manera más solapada pero latente. La reacción ante la valiente actitud de Olympe de Gouges no se hizo esperar y fue calificada de “histérica, irracional y delirante”. Meses antes de ello, el Comité de Salud Pública declaraba que “no era parte de la naturaleza de las mujeres tener pensamientos elevados”.

Siguió siendo debatido y criticado en las Asambleas y se argumentaba sin pudor que era contrario a todas las leyes de la Naturaleza que una mujer quisiera volverse hombre.

En 1848 se aprobó la Declaración universal de los Derechos del Hombre, terminología que no se cambió hasta 1950 tras lograr que la ONU cambiara ese nombre por el de Derechos Humanos.

Ha sido en épocas muy recientes cuando desde los organismos internacionales y algunos nacionales se ha comenzado a una lucha contra la concepción androcéntrica por las gravísimas consecuencias que acarrea para las mujeres. Entre éstas se halla la violencia de género como el más puro y brutal mecanismo de colocar a la mujer y lograr que se mantenga en la posición que debe por el mero hecho de ser mujer, de lograr que se someta a la voluntad del hombre cuya situación prioritaria viene marcada por leyes naturales, sociales, culturales e incluso religiosas⁴.

Son tratados internacionales, conferencias a nivel mundial y resoluciones de todo tipo de organismos los que han terminado

4 En palabras del Dr. Miguel Lorente Acosta, “para que la violencia de género pueda iniciarse y hacerlo desde una posición basada en el afecto y el cariño, ha de partirse de una desconsideración de la víctima, de situarla en una posición inferior a la del hombre en el modelo jerárquico patriarcal. Así, cualquier decisión de distribución de roles, de asignar tareas, destacar conductas, cuestionar o criticar decisiones, privar de posibilidades o minimizar consecuencias, no pare de la idea de hacer algo injusto sino que se hace desde los valores androcéntricos levantados y tomados como referencia para la organización social y para la regulación de las relaciones y funciones dentro de ella”. Cfr. *Agresión a la Mujer: maltrato, violación y acoso: entre la realidad social y el mito cultural*, Granada, 1998, p. 60..

por inspirar las reformas que ha sufrido nuestra legislación. No pueden dejar de citarse como las más influyentes, la Conferencia Mundial sobre la condición jurídica y social de la mujer (México D.F en 1975); la pionera Convención de ONU sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979;; II Conferencia Mundial sobre la condición jurídica y social de la mujer (Copenhague 1980); III Conferencia Internacional sobre la condición jurídica y social de la mujer (El Cairo en 1985); IV Conferencia Mundial sobre la condición jurídica y social de la mujer (Beijing en 1995); la Conferencia mundial sobre los Derechos Humanos (Viena 1993), Declaración sobre la eliminación de la violencia sobre la Mujer de Naciones Unidas (Resolución de la Asamblea General 48/104 de 20 de diciembre de 1993), Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Brasil, 1994), la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994); Estrategias y Medidas prácticas modelo para la eliminación de la violencia contra la mujer en el campo de la prevención del delito y la Justicia Penal (Asamblea General de Naciones Unidas, 1998); y Beijing + 5: la mujer en el año 2000: Igualdad entre géneros, desarrollo y paz en el s. XXI, Nueva York en el año 2000.

II. CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En 1995 en la Conferencia de Beijing se concluyó que “es violencia sobre la mujer todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real, un daño de naturaleza física, sexual o psicológica, incluyendo las amenazas de coerción sobre la privación arbitraria de la libertad sobre las mujeres, ya se produzcan en la vida pública o en la privada”.

Para el Consejo de Europa es violencia de género “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales

acto, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la violencia familiar como una patología, tanto psicológica como física, que afecta severamente la salud de la víctima y que refleja, por sí misma, la patología de la persona agresora. Dentro de la violencia familiar se incluyen todas aquellas injurias, malos tratos, amenazas, omisiones, silencios, golpes y lesiones inferidas sistemáticamente entre los miembros de la familia que producen, como efecto inmediato, la disminución en la autoestima de la víctima y, por lo tanto, la disminución de su capacidad de respuesta ante las responsabilidades que la sociedad le reclama. Y ello en forma independiente de las lesiones físicas que pudieran ser consecuencia de estas agresiones, que van desde las levísimas (hematomas y excoriaciones) pasando por las que ponen en peligro la vida, hasta llegar al asesinato mismo. Según la OMS la violencia doméstica es la más común de las agresiones en contra de la mujer y ésta tiene más posibilidades de ser lastimada, asesinada o violada por su compañero actual o el anterior que por cualquier otra persona. Dicen los expertos que es un tipo de agresión comparable a la tortura porque están destinadas las agresiones a lesionar la salud psicológica de la mujer al igual que su cuerpo, y suelen ir acompañadas de humillación y violencia física. Al igual que sucede en la tortura las agresiones son impredecibles y guardan poca relación con el comportamiento de la mujer. Pueden sucederse estas agresiones una semana tras otra durante muchos años. A la similitud entre tortura y violencia de género ha de añadirse el carácter oculto de las agresiones, así como las dificultades que hace frente la víctima para hacerse oír y obtener la justicia que demanda.

Centrándonos ya en la violencia de género sus características principales son las siguientes:

- Es una violencia inmotivada.

Puede estallar ante cualquier situación que el agresor considere como ofensiva a su posición o los criterios que según él deben regir la relación establecida.

- Es una violencia extendida.

No solo afecta a la mujer directamente como sujeto pasivo de las agresiones sino que afecta a los menores que conviven en el 40% de los casos también directamente (Appel y Holden, 1998) pero en el 100% de los casos como consecuencia de vivir en dicho clima de violencia (Jouriles, McDonald y Norwood, 1999). En ocasiones esa violencia se extiende también sobre mascotas o sobre objetos de especial importancia para la víctima⁵.

- Es una violencia excesiva.

En la violencia de género la intensidad es mucho mayor que si se tratar de otro tipo de violencia puntual en cuanto a la relación entre la proporción hipotética entre la agresión y el tipo de conflicto que la genera.

- Es una violencia continuada.

La violencia de género es un proceso que se construye paulatinamente. No es una repetición de hechos aislados más o menos frecuentes y más o menos intensos sino que se caracteriza por la continuidad. Es la propia permanencia en la violencia el elemento fundamental para conseguir los objetivos que persigue el maltratador. Y ello porque como luego veremos este proceso, el llamado ciclo de violencia, es instrumental. Se ejerce la violencia de género para lograr una serie de objetivos por parte del maltratador.

En palabras de E. Echeburúa (1994) el ciclo de la violencia, este proceso, es una secuencia repetitiva y en espiral que explica gran parte de los casos de maltrato crónico. Violencia repetida e intermitente que se entremezcla con otros períodos de arrepentimiento y ternura que suscita en la mujer víctima una gran ansiedad o unas respuestas de alerta y sobresalto permanente⁶.

5 Vid. R. McDonald / E. N. Jouriles / W. Norwood / H. S. Ware / E. Ezell, "Husbands' marital violence, general marital discord, and behaviour problems among clinic referred children", *Behaviour Therapy*, Vol. 31, nº 4, 2000, pp. 659 y ss.

6 Vid. E. Echeburúa, *Personalidades violentas*, Madrid, 1994, pp. 47 y ss.

- Es una violencia donde existe o ha existido una relación afectiva de pareja entre maltratador y víctima.

En tal relación los modelos de comportamiento o conducta y de comunicación se basan en el esquema asimétrico de dominio y sumisión.

Para el psicólogo Juan Ignacio Paz Rodríguez⁷, las características de la violencia de género son las siguientes:

- Se desarrolla en el ámbito doméstico y privado lo que impide conocer la magnitud real, dificulta la prueba y beneficia la impunidad.
- Tiene un origen y una motivación sociocultural (discriminación de género y patriarcado): tiene su origen en la estructura social y en el conjunto de valores, tradiciones, creencias y costumbres que favorecen y mantienen la desigualdad entre hombres y mujeres.
- Se aprende a través de la asimilación e imitación de modelos.
- Se mantiene por falta de rechazo social: la sociedad invisibiliza este tipo de violencia, excepto en sus formas de agresión más grave, llegando incluso a responsabilidad y culpabilizar a la propia víctima de la violencia sufrida.
- Es instrumental ya que es una herramienta para lograr unos objetivos concretos: asegurar el dominio de uno sobre otra, con la finalidad de mantener la desigualdad y los privilegios del hombre.
- Se presenta de forma discontinua e impredecible para la víctima.
- Se construye paulatinamente en un proceso global y continuo que se inicia con la desigualdad, se desarrolla

7 Juan Antonio Paz Rodríguez, licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, en el año 1987, trabaja, desde 1990, en el Instituto Andaluz de la Mujer. Desde noviembre de 1998 hasta septiembre de 2007 ha desarrollado su actividad en el Departamento Psicológico del Centro Provincial del IAM de Sevilla. Una parte fundamental de su trabajo se ha orientado a la recuperación emocional y psíquica de las mujeres víctimas de violencia de género, lo cual incluía la atención individualizada y tratamiento grupal.

o continúa con el dominio y se completa con la violencia como forma de mantener esa desigualdad y ese dominio.

- Genera daños a la víctima en distintas dimensiones: físicas, psicológicas, sociales y patrimoniales.
- Provoca una anulación de la personalidad de la víctima generándole una fuerte dependencia emocional hacia quien la ejerce.
- Genera daños a la familia y a la propia sociedad.

Es Leonore Walker⁸ quien a partir de su trabajo con mujeres definió el Ciclo de la Violencia, modelo más utilizado en la actualidad por los profesionales en la materia. Se describen tres fases en el ciclo:

a) *Fase de acumulación de tensión*: los actos hostiles hacia la mujer se suceden ante lo que el agresor siente como frustración de sus deseos, provocación o simplemente molestia, produciendo conflictos en la pareja. El maltratador alterna los accesos violentos verbales e incluso a veces físicos a la mujer con cambios de ánimo que la víctima no acierta a comprender y que suele justificar, no siendo consciente del proceso de violencia en el que vive. La mujer pretende cambiar a su pareja, complacerla, evitar lo que le pudiera molestar en la falsa creencia de que puede lograr no sufrir más agresiones. Esta tensión va creciendo poco a poco y llega la segunda fase.

b) *Fase de agresión*: aparecen los malos tratos psicológicos, físicos y/o sexuales. La mujer presenta un estado de ansiedad y de temor en el que suele llegar a consultar, pedir ayuda o incluso denunciar.

c) *fase de reconciliación o luna de miel*: el agresor pide perdón, se muestra amable, cariñoso, hace propósito de enmienda, promete cambiar y todo ello para evitar la ruptura de la relación.

8 Leonore Walker define el Ciclo de la Violencia entre 1979 y 1980 utilizando el modelo de la Teoría del Aprendizaje Social de la desesperanza e indefensión de Martin Seligman (Universidad de Pennsylvania, 1967).

Se trata de una manipulación afectiva a la mujer que, como ya se ha indicado, desea el cambio, anhela que su pareja “cambie” y asume que ella puede contribuir a que lo haga. Pero no es así. Tan solo es una fase que precede a una nueva época de tensión. Es en la tercera fase donde se produce el cambio de actitud de la mujer en el proceso judicial iniciado por ella. Ante las promesas de cambio, creyendo que va a ser así, y entendiendo que es indispensable su ayuda para que lo logre, la mujer que ha denunciado manifiesta su deseo de “retirar” la denuncia, se acoge a su derecho a no declarar y regresa a la convivencia interrumpida. Las explicaciones que la víctima da a su comportamiento son de muy diversa índole, y van desde la excusa de que él “está enfermo y si se cura, volverá a ser como antes” hasta dar una apariencia de normalidad porque “tampoco fue para tanto, todas las parejas discuten”. Cree en la palabra de su pareja, confía en que esta vez la promesa de cambio se hará realidad.

Pero no es así. El ciclo comienza de nuevo sin solución de continuidad, comportándose como una espiral cada vez más corto donde las dos primeras fases suelen ser más duraderas, intensas y frecuentes y disminuye la tercera, casi desapareciendo. Es una situación de escalada de violencia que comporta un elevado y creciente peligro para la mujer que se explica por el patrón de comportamiento “agresión-indefensión-sumisión” que se retroalimenta continuamente.

III. TIPOS DE MALTRATO

La violencia de género tiene un objetivo claro que la da sentido: conseguir o mantener el control sobre la víctima. Para ello el agresor acudirá a cuantas conductas lesivas precise, ya sean físicas, psíquicas y sexuales, conductas que se interrelacionan constantemente.

El maltrato psíquico siempre subyace y de manera ocasional habrá maltrato físico:

- El maltrato psíquico siempre está latente porque sólo sobre la aniquilación psicológica de la víctima puede construirse la violencia física habitual.
- Existirá de manera ocasional el maltrato físico porque a veces basta el psíquico el control y el abuso emocional para conseguir el objetivo antes indicado. Si para ello el maltratador no requiere más que el maltrato psíquico, nada le compele a la agresión física.

EL MALTRATO FÍSICO

Comprende desde las erosiones y excoiaciones hasta heridas causadas por distintos tipos de armas. Aparecen las lesiones en toda región anatómica si bien lo más frecuente es encontrar excoiaciones, contusiones y heridas superficiales en cabeza, cara, cuello, pechos y abdomen.

Se caracteriza por la presencia de recientes y múltiples y diferentes tipos de lesiones combinadas con las lesiones antiguas, referencias vagas de molestias y dolores cuya etiología no se corresponde con el motivo de la consulta.

Se indica por los forenses que se trata de la somatización reactiva constituyendo el grupo de hiperfrecuentadoras del sistema sanitario.

Otra característica propia de la violencia de género en su modalidad de maltrato físico es la presencia de lesiones de defensa, no presenta lesiones la mujer que indiquen una pasividad de la víctima (a diferencia de lo que ocurre en el síndrome de Niño Maltratado) y además se localizan la mayor parte de las lesiones en zonas no visibles una vez que la mujer está vestida. Siguiendo a Patterson y Reid diremos que las circunstancias de las que depende el cuadro lesional son el grado de violencia empleado, la repetición seguida de la agresión y la unión del maltrato a otro tipo de hecho. Los dos últimos factores aumentan la capacidad lesiva, ya que conllevan un incremento del grado de violencia y hacen, además que la víctima sea incapaz de recuperarse para la siguiente agresión al encontrarse física y psicológicamente aturdida por la rapidez de sucesos.

MALTRATO PSÍQUICO

Las lesiones pueden ser agudas, que son inmediatas a la agresión, o lesiones a largo plazo que son las que aparecen como consecuencias de la situación mantenida de maltrato.

A) Lesiones agudas:

Los especialistas en la materia han indicado que la primera reacción tras la agresión normalmente consiste en una autoprotección y en tratar de sobrevivir al proceso. Suelen aparecer reacciones de shock, negación, confusión, abatimiento, aturdimiento y temor. Durante el ataque, e incluso, tras éste, la víctima puede ofrecer muy poca o ninguna resistencia para tratar de minimizar las posibles lesiones o para evitar que se produzca una nueva agresión.

Al saber que pueden sufrir una nueva agresión en cualquier momento, presentan una extrema ansiedad, un estado de alerta permanente que puede llegar a una verdadera situación de pánico. Es clarificador lo que muchas de estas víctimas narran respecto al ruido que hacía la puerta de su domicilio al abrirse. Algunas afirman que ese sonido les sobresaltaba porque no sabían qué iba a pasar después, qué ocurriría, de qué humor vendría su agresor, l...

La práctica forense ha demostrado como tras el tercer incidente el componente de shock descende e forma significativa, desarrollan habilidades de supervivencia y adaptación más que de huida o escape.

B) Lesiones a largo plazo (Goodman, Walker)

Dentro de este grupo aparecen el temor, la ansiedad, la fatiga, alteraciones del sueño y del apetito, pesadillas, reacciones intensas de susto y quejas físicas, molestias y dolores inespecíficos, encontrando muy difícil tomar decisiones para realizar planes a largo plazo. Sentimientos de baja autoestima, depresión, reacciones de stress intensas y sensación de desamparo e impotencia.

Incapacidad para controlar el comportamiento violento de sus agresores. Sin embargo presentan un elevado control interno.

Romero (1985) establece tres áreas comunes de las víctimas de violencia de género con los prisioneros de guerra:

1.- El abuso psicológico que se produce dentro de un contexto de amenazas de violencia física conduce al temor y debilitación de las víctimas.

2.- El aislamiento de las víctimas respecto a anteriores fuentes de apoyo y a las actividades fuera del ambiente hogareño.

3.- Existe un refuerzo positivo de forma inminente ocasionado por el temor y la pérdida personal que refuerza la dependencia emocional de la víctima a su agresor.

MALTRATO SEXUAL

La OMS define la agresión sexual centrándose en tres puntos, modificando la dada por Saltzman, Fenlow, McMahon y Shelley (1999):

1.- Uso de la violencia física o de la presión psicológica para obligar a una persona a participar en una relación sexual en contra de su voluntad, con independencia de que el acto sexual se llegue a consumir o no.

2.- Relación sexual (consumada o no) con una persona incapaz de comprender la naturaleza o el significado del acto o de poder rechazarlo o de manifestar su negativa a participar en él.

3.- Contacto sexual abusivo.

El maltrato sexual no es infrecuente, como es lógico, en el ámbito de una relación marcada por la violencia de género. El hombre maltratador, siguiendo el esquema de preponderancia sobre la mujer, sobre la creencia de que ésta por el rol social que ocupa en la relación, carece de igualdad de derechos y libertades, no duda en emplear la fuerza o la intimidación, bastando en la mayor parte de los casos con que evoque agresiones anteriores,

para mantener relaciones sexuales con la mujer. En todos estos casos la intimidación está presente. Escasa libertad para decidir mantener o no relaciones sexuales tiene una mujer que sabe que cualquier actitud contraria a los “deseos” de su pareja puede desembocar en agresión física de toda índole.

SÍNDROME DE MUJER MALTRATADA

El síndrome de mujer maltratada, definido por Walker y Dutton, se configura como una adaptación a la situación adversa caracterizada por el incremento de la habilidad de la persona para afrontar los estímulos adversos y minimizar el dolor, además de presentar distorsiones cognitivas, como la minimización, negación o disociación: por el cambio en la forma de verse a sí mismas, a los demás y al mundo. También pueden desarrollar los síntomas del trastorno de estrés postraumático, sentimientos depresivos, e rabia, baja autoestima, culpa y rencor; y suelen presentar problemas somáticos, disfunciones sexuales, conductas adictivas y dificultades en sus relaciones personales.

Es ejemplificativa la respuesta que una mujer dio a la pregunta del instructor de si lo que estaba narrando era la primera vez que ocurría, de si era la primera vez que la agredía. Aquella mujer contestó de manera rotunda “sin motivo, sí”. Es decir, asume la mujer que padece este síndrome que o bien su situación es la “normal”, la que se da en todas las relaciones (“todos los matrimonios discuten”) o bien que su pareja sólo actúa de esa forma cuando está bajo los efectos del alcohol o de las drogas (“cuando está bien es muy bueno”) o bien, incluso, que llega a ser “merecedora” de tal conducta por algún acto previo suyo (“es la primera vez que me pega sin motivo”).

Estas mujeres tratan de explicar su decisión de renunciar a la continuación del procedimiento aduciendo que quizás no era tan grave como lo planteó, que se trataba de discusiones que “se iban de las manos”, y que puede cambiar, que ella puede ayudarle porque todo lo ocurrido se debe a un problema externo, que en nada tiene que ver con la conducta ordinaria de su pareja.

Enrique Echeburúa y Paz del Corral⁹ equiparan estos efectos al trastorno de estrés postraumáticos cuyos síntomas y características aparecen en algunas de estas mujeres. Son la re-experimentación del suceso traumático, la evitación de situaciones asociadas al maltrato y aumento de la activación. Tienen dificultades para dormir con pesadillas en las que reviven lo pasado, están continuamente alerta, hipervigilantes, irritables y con problemas de concentración.

Además, el alto nivel de ansiedad genera problemas de salud y alteraciones psicosomáticas, y pueden aparecer problemas depresivos importantes.

Dentro del síndrome, Marie-France Hirigoyen¹⁰ diferencia dos fases: las consecuencias que se producen en la fase de dominio y las que se producen a largo plazo.

En la primera fase la mujer se encuentra confusa y desorientada, renuncia incluso a su propia identidad y atribuye al agresor aspectos positivos que la ayudan a negar la realidad. Están agotadas por la falta de sentido que el agresor impone en su vida, sin llegar a comprender lo que sucede, están solas y aisladas de su entorno familiar y social y en constante tensión ante cualquier respuesta agresiva de su pareja.

Las consecuencias a largo plazo, son para esta experta, las que surgen en aquellas etapas por las que pasan las víctimas a partir del momento en que se dan cuenta del tipo de relación en que están inmersas. En esas etapas van desde sentirse heridas, estafadas y avergonzadas hasta encontrarse apáticas, cansadas y sin interés por nada.

9 Vid. E. Echeburúa / Paz de Corral, *Manual de violencia familiar*, Madrid, 1998, pp. 88 y ss.

10 Vid. M. F. Hirigoyen, *El acoso moral: el maltrato psicológico en la vida cotidiana*, Barcelona, 1999, pp. 102 y ss.; misma autora, *Mujeres Maltratadas. Los mecanismos de la violencia en la pareja*, Barcelona, 2006, pp. 61 y ss.

IV. LA LEGISLACIÓN ESTATAL. EVOLUCIÓN Y ACTUALIDAD

Una vez conceptualada y caracterizada someramente la violencia de género, es preciso entrar también en términos generales al análisis de la evolución legislativa estatal.

Podemos tomar el punto de partida por ser percibido en la actualidad como escandaloso e irracional, el Código Penal de 1822 que recogía el uxoricidio como un delito parcialmente justificado por la conducta de la víctima al no imponer pena alguna al “marido matador de su esposa adúltera o al padre que lo fuere de su hija impúdica y de sus partícipes en el adulterio o la corrupción”¹¹.

En los códigos de 1848, 1850 y 1870 se mantiene la protección al uxoricida castigándole con penas de destierro que llegan a desaparecer cuando la mujer no falleciera a consecuencia de las lesiones. Continúa regulándose en el Código Penal de 1928 y desaparece en el de 1932 eliminándose así mismo el adulterio de la esposa como delito.

Pero la situación no es duradera. Una Ley de 11 de mayo de 1942 vuelve a castigar el amancebamiento y el adulterio, llegando así al Código Penal de 1944. Este código conllevó un durísimo empeoramiento de la situación jurídica de la mujer ante las leyes penales. Se desprendía de la regulación punitiva que la mujer era sólo un objeto de posesión masculina, que representaba el honor familia y que debía aunar todos los valores sociales que dominaban en aquel momento y que serían impuestos con todos los medios de los que el Estado dispusiera.

El art. 449 del Código Penal de 1944 disponía: “cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio. No se impondrá pena por delito sino en virtud de querella del marido agraviado”.

11 Sobre el uxoricidio vid. el clásico trabajo de A. Quintano Ripollés, Tratado de Derecho Penal, Parte Especial, 2ª ed., Vol. 1, Madrid, 1972, pp. 113 y ss.

Tal condición de perseguibilidad, esto es, someter el inicio del procedimiento a la interposición de querrela no es sino el evidente reflejo de la consideración de la situación de la mujer bajo la dominación del marido, que tenía en sus manos la decisión de sancionar o no la conducta de aquella. El honor podía “lavarse” o no según el propietario, el poseedor de la mujer tuviera a bien. Tanto es así que en un precepto siguiente se determinaba que el marido podía en cualquier tiempo remitir la pena impuesta a su mujer. El castigo o la sanción era cuestión del esposo, el Estado se limitaba a ofrecerle y poner a su disposición sus medios para lograrlo. La visión androcéntrica de la sociedad y del propio Estado en todo su esplendor. Pero aún va más allá el texto punitivo, aún existe algún otro precepto que refuerza lo anteriormente dicho y que pone de relieve la diferencia entre el varón y la mujer, la desigualdad de derechos y de sanciones, lo punible de una conducta dependiendo de quién la llevara a cabo. Estamos ante el derecho penal de autor dependiendo de su género.

Y es que el art. 452 disponía que para considerar delito el adulterio en el caso del varón era necesario que “el marido tuviera manceba dentro de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella”.

Es decir, a la mujer se le castigaba porque yaciera una sola vez con un hombre que no fuera su esposo, aunque estuviera separada de hecho de éste, mientras que esa misma conducta realizada por el hombre, no era punible. La permanencia y la habitualidad eran un elemento del tipo penal, lo que no era exigible en el caso de la mujer.

Véase una sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1958 que decía “los yacimientos extramatrimoniales del procesado tuvieron lugar en el domicilio de su madre y es improcedente la pretensión de la querellante de que, por habitar en él el marido, fuese por tal circunstancia el domicilio conyugal”.

Como no podía ser de otra forma, el uxoricidio se introduce en su versión más remota en el art. 428: “el marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer matare en el acto a los adúlteros o

a alguno de ellos, o les causare cualquiera de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. SI les produjere lesiones de otra clase, quedará exento de pena”.

Tal privilegio marital se mantuvo hasta el año 1963 en el que se derogó del Código Penal.

El honor, la honestidad, la honra de la mujer se protege frente a casi cualquier circunstancia y su invocación llega a tener influencia para el legislador del momento a la hora de tipificar determinadas conductas de ésta. Así cuando de ocultar la deshonra se trata se regulaban tipos atenuados del tipo básico como el parricidio, el aborto y el abandono de niños. Este es el caso del infanticidio privilegiado al sancionar que “la madre que para ocultar su deshonor matare a su hijo recién nacido será castigada con la pena de prisión menor”.

La libertad sexual de la mujer en aquella época tampoco estaba protegida. Las sanciones a conductas que atentaban contra ella, bajo la rúbrica de los delitos contra la honestidad (que no libertad) sexual, protegían a otro bien jurídico distinto al de la mujer en sí, se trataba de proteger otros valores diferentes a la misma. No se castigaban las conductas que atentaban a la libertad propia de todo ser humano de decidir sobre su sexualidad y esto se veía en delitos como el estupro simple, el rapto o los delitos relativos a la prostitución.

La honestidad de la mujer era la que merecía la protección punitiva.

Así en el estupro simple se castiga al que yaciera con mujer mayor de dieciséis años y menor de veintitrés cuando el yacimiento se hubiera conseguido mediante engaño. En consonancia con la rúbrica del título que recogía estos delitos, recuérdese que eran “Contra la Honestidad”, el Tribunal Supremo de aquellos años exigía para condenar al autor de tal conducta que la mujer fuera honesta y de buenas costumbres. Se marcaba ya un primer límite para poder tener la consideración de víctima, de sujeto pasivo del meritado ilícito penal. Pero el Tribunal Supremo en sus sentencias explica el “por qué” de esos límites

de edad siendo de lo más tajante al decir en alguna de ellas que “se supone que hasta los veintitrés años la mujer es un ser frágil, quebradizo, débil, inexperto, inmaduro e irreflexivo, que puede ser sin auténtica voluntad y libre consentimiento, seducida por el artificio varonil hasta el punto de decidirse a entablar relaciones inter y heterosexuales”¹².

Como colofón a la consideración que se tenía del bien jurídico atacado en las agresiones sexuales se eximía de pena al culpable si contraía matrimonio con la mujer.

A partir de los veintitrés años la mujer poco tenía que decir para el legislador y para el Poder Judicial y sus representantes, pero mucho menos aún antes de esa edad. La mujer no sólo en el ámbito punitivo sino en todas las esferas jurídicas no dejaba de ser un “cuasi objeto” de propiedad o posesión del varón, ya fuera primero su padre ya lo fuera posteriormente el marido.

Se hace preciso asomarnos a otras normas ya no penales pero que van a permitir al lector hacerse una idea aún mayor del estado de cosas.

En el derecho privado, el Código civil con anterioridad a la reforma de 1958 otorgaba al esposo las mayores facultades de administración y disposición. Esa reforma pretendía, entre otras cosas, limitar esas omnímodas facultades y así exigía el consentimiento de la esposa para disponer de bienes inmuebles y establecimientos mercantiles.

La situación en el Código Civil ya indicamos en el principio que varía con la ley 14/75 de 2 de mayo.

Estos extremos y otros cambian con la citada ley donde ya se le reconoce a la mujer casada plena capacidad procesal y de obrar respecto a la administración y disposición de sus bienes, sin necesidad de licencia del marido. El art. 62, tras la reforma,

12 La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1958 señalaba que “los yacimientos extramatrimoniales del procesado tuvieron lugar en el domicilio de su madre y es improcedente la pretensión de la querellante de que, por habitar en él el marido, fuese por tal circunstancia el domicilio conyugal”.

proclama que “el matrimonio no restringe la capacidad de obrar de ninguno de los cónyuges”.

En el ámbito laboral hasta 1961 la mayoría de las ordenanzas laborales establecían despidos forzosos de las trabajadoras al contraer matrimonio y hasta 1966 no se permitió a las mujeres ejercer como magistrados, jueces y fiscales.

Dicho lo anterior, y regresando ya al punto central de nuestro análisis, es con el Programa de Actuación Jurídica y Política de los Pactos de la Moncloa de 1977 cuando se abordan con carácter de urgencia varias reformas de gran importancia para la mujer en el derecho penal como fueron la despenalización del adulterio y el amancebamiento, la regulación de la expedición de los anticonceptivos y su despenalización y la modificación de las edades de la mujer tomadas en consideración al tipificar el rapto y el estupro. Tales reformas se llevaron a cabo por la ley 22/1978 de 26 de mayo, la ley 45/1978 de 7 de octubre y la ley 46/1978 de 7 de octubre que al modificar el estupro y el rapto no solo afectó a las edades sino que considera como sujeto pasivo a la persona, ya no a la mujer.

Comienza una etapa de grandes cambios legislativos que van aproximando poco a poco a la mujer al menos en el aspecto formal a la idea de “paridad”, de igualdad sin posibilidad de discriminación por razón de sexo que proclamaba la Constitución Española en su art. 14.

Pero en materia de violencia sobre la mujer hay que esperar aún unos cuantos años más. Y es que los principales hitos legislativos en esta materia arrancan once años después de la promulgación de la Constitución. Tales leyes son la LO 3/1989 de 21 de junio, la LO 14/1999 de 9 de junio, la LO 11/2003 de 29 de septiembre y la más novedosa y comentada LO 1/2004 de 28 de diciembre.

Después de las meritadas modificaciones aparecen en nuestro sistema procesal y material instituciones y tipos penales esencialmente referidos a la violencia de género como fenómeno que se produce en el ámbito de la pareja, aún viva o ya extinta.

La orden de protección, la calificación como delito de lo que antes se consideraban faltas como las amenazas y coacciones leves, el delito de maltrato en el ámbito familiar y el delito de malos tratos continuados, son fruto de esa evolución.

No puede obviarse que la LO 1/2004 como su propio nombre indica trata de dar respuesta a los distintos efectos, consecuencias y problemas que genera la violencia de género, ya desde el punto de vista social, económico, asistencial y por supuesto penal, con más o menos acierto y con más o menos efectos prácticos, ya que en un gran número de casos, el texto legislativo se ha quedado en una mera declaración programática, sin reflejo en la realidad.

LA sola aplicación por Juzgados y Tribunales de los tipos penales plantea más de un problema en la práctica, problemas que son comunes en mayor o menor medida en todo el Estado.

IV.1. Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género

El art. 1 de la ley establece el ámbito de aplicación al decir que tiene por objeto “actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia”.

Como vemos y hemos ya indicado en varias ocasiones, el ámbito de la ley parte del presupuesto de la relación de afectividad. El legislador no entra en la violencia de género en el ámbito laboral, jerárquico, docente o de otro tipo.

El art. 153 sanciona el menoscabo psíquico o la lesión no definida como delito en el Código, el golpear o maltratar de obra sin causar lesión a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por análoga relación de afectividad aún sin convivencia, agravando la pena si los actos mencionados

se dan en el domicilio común o de la víctima o ante menores o utilizando armas.

Aquí surge uno de los primeros problemas prácticos y es que en Juzgados y Tribunales se plantea muy habitualmente qué ha de entenderse por menoscabo psíquico, cuáles son los criterios para valorarlo, ya que mientras que un hematoma es visible no se sabe muy bien ante la indefinición a qué se refiere el legislador.

El art. 171 Código Penal sufre su mayor modificación con esta ley (aunque en cuanto a las penas ya había sido modificada por la LO 15/2003) en lo que se refiere a la violencia de género a la amenaza leve de la mujer ya descrita, agravándolo en caso de perpetrarlo en presencia de menores, en el domicilio común o de la víctima o quebrantando alguna medida del art. 48 del Código Penal o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

A pesar de ello, el propio precepto prevé la posibilidad de la imposición de pena inferior en grado atendiendo a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho.

El art. 172: recoge por primera vez el delito de coacciones leves en violencia de género, con idénticas agravaciones y atenuaciones que en el caso de las amenazas leves.

La definición de coacción la hallamos en el primer párrafo de dicho artículo y viene a ser la conducta de quien sin estar legítimamente autorizado, impidiera a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto.

Y por último el art. 173.2 del Código Penal, que no fue afectado por esta reforma, sino que su texto proviene de la efectuada por la LO 15/2003 castiga, siempre ateniéndonos a la violencia de género, al que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre la mujer que esté o haya estado ligada al autor en matrimonio o en análoga relación de afectividad. Se agravan las penas si alguno o algunos de los actos se efectúan en presencia

de menores, o utilizando armas o en el domicilio común o de la víctima, o quebrantando las medidas del art. 48 del Código Penal o cautelar o de seguridad o de prohibición de la misma naturaleza. Establece el precepto, además, qué ha de entenderse por habitualidad, debiendo atenderse al número de actos acreditados, su proximidad temporal, con independencia de que se ejerzan sobre la misma o diferentes víctimas de las que allí se señala o de que hayan sido o no objeto de enjuiciamiento separado.

Con el panorama legal, procesal y material punitivo, tan someramente reseñado se plantean en la práctica diaria numerosos problemas pudiendo sintetizarse en los siguientes puntos:

1.- La difícil compatibilización en la práctica del carácter público de estos delitos en cuanto a su perseguibilidad y el reconocimiento del derecho a no declarar del art. 416 de la LECR.

Aquí se hace precisa o bien la reforma del precitado artículo o bien, y partiendo de que mi postura no tiene por qué ser la acertada, una interpretación sistemática correcta de dicho precepto.

Es decir, que o bien se excepciona de la propia excepción, valga la redundancia, los casos de las víctimas denunciantes de casos de violencia de género o bien se tiene en cuenta que esa dispensa de declarar está pensada para los testigos y no para los denunciantes.

La posición del testigo y del que interpone una denuncia es completamente diferente. El testigo está obligado a acudir al llamamiento judicial, a responder a cuantas preguntas se le efectúe y a decir verdad. El testigo aparece una vez iniciada una causa por un determinado delito y se le llama para que dé razón de lo que tuviere conocimiento. Pero es testigo, él no ha iniciado el procedimiento, él no ha transmitido la noticia criminis. La LECr diferencia a la perfección entre el testigo y el denunciante, y así se traduce en la regulación apartada de ambas figuras. La LECr no habla de la dispensa a declarar del denunciante, antes al contrario, prevé la denuncia como una obligación en todo caso distinguiéndola de la querella. El art. 416 regula la dispensa de declarar de los

testigos y lo hace atendiendo a la paz familiar, al viejo principio de la intervención mínima del derecho penal. El legislador asume el dilema moral y afectivo que se plantea en los miembros de la familia más cercana al obligarles a declarar “contra” uno de ellos. Hasta así se comprende que los hijos, los hermanos y los familiares del presunto maltratador que han sido testigos de estos episodios de violencia, puedan decidir libremente, sin la presión que implica una posible sanción legal, declarar. Pero la víctima, la mujer que ha interpuesto la denuncia, ya ha declarado “contra” él. No se comprende que sigamos reconociendo el derecho una vez iniciado el procedimiento a instancias precisamente de ella. No podemos invocar la paz familiar porque es precisamente ésta la que se ha visto atacada por los actos delictivos. El bien jurídico del art. 173.2 del Código Penal trasciende a los derechos a la vida, a la integridad física y moral, a la salud a pesar de su encuadre sistemático. El bien jurídico atacado en este tipo penal, según el Tribunal Supremo ha declarado en infinidad de sentencias y ya con anterioridad a la regulación actual, es precisamente la dignidad y la paz familiar, la estabilidad de la familia como núcleo básico de la sociedad. Así las cosas no tiene mucho sentido que tratando de proteger con la figura delictiva un bien jurídico, se lesione en la práctica judicial ese mismo bien. Pero incidiendo en el principio, acorde con una interpretación literal y sistemática, la supuesta exención de la obligación de declarar en modo alguno podría extenderse a la denunciante víctima ¹³.

Cierto es que en ocasiones las diligencias previas se incoan de oficio y no por denuncia de la perjudicada, que es la llamada de un vecino, o un parte de un organismo social u otra vía, la que da lugar al inicio del procedimiento. En estos casos el “papel” jurídico de la perjudicada varía y sería recomendable la reforma del art. 416 LECr para zanjar controversias. Pero aún así, la perjudicada, entiendo, podría no reclamar, no ejercitar las acciones penales y civiles que se dimanen del delito, pero aún en

13 Sobre este tema vid. I. Montalbán Huertas, “Un fantasma llamado dispensa”, Diario El País de 2 de enero de 2008.

ese caso no sería un mero testigo. A los testigos no se les realiza el ofrecimiento de acciones que se lleva a cabo frente a cualquier perjudicado. Le coloca por tanto la propia ley en un lugar especial, en un lugar que conlleva su protección penal y que le saca del círculo de afectados por el art. 416 LECR.

La problemática está servida y está, por ende, siendo objeto de polémica doctrinal, por más que en la práctica forense a las víctimas de los delitos de violencia de género se les esté tratando como si de testigos se tratara y se les informa del derecho del art. 416 LECR.

2.- Un segundo punto que plantea no solo discusiones doctrinales sino que se convierte en la piedra de toque de los Juzgados en si en caso de quebrantar una orden de protección, medida cautelar o pena de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima, con el consentimiento expreso de ésta, ha de ser una acción punible. Máxime si se tiene en cuenta que se agravan las penas de los delitos, como hemos visto, cuando se quebrantan tales prohibiciones.

Son innumerables los casos que en los Juzgados con competencia en violencia de género las inicialmente denunciantes, las víctimas, manifiestan su voluntad de lo que ellas denominan “retirar” la denuncia o que se alce la medida impuesta.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha sido, por más que en muchos foros se empeñen, unánime. De hecho podríamos decir que no existe Jurisprudencia ya que no han recaído aún dos sentencias en el mismo sentido. Con independencia de que entre o no en juego la agravación si ha existido el quebrantamiento, el delito en sí, el tipo penal que se recoge en el art. 468 del Código Penal parece consumado aun existiendo tal consentimiento. Esta postura no es pacífica ni mucho menos.

Por mi parte, entiendo que así es, que no puede dejarse al albur de la decisión de la perjudicada una medida o pena judicial. Y ello por distintas razones de muy diferente índole.

En primer lugar porque el delito de quebrantamiento de medida del art. 468 del Código Penal se encuadra dentro de la

rúbrica “de los delitos contra la administración de justicia”. El bien jurídico protegido en este tipo penal no es la integridad de la mujer que ha sido víctima de violencia de género sino la propia administración de justicia, el funcionamiento de ésta, y el respeto y acatamiento a las órdenes de los Juzgados y Tribunales. Así, por más que se entienda que el consentimiento debe tener algún efecto, de lo que no hay lugar a dudas es que el presunto autor del acto de violencia de género debería ser condenado como autor del tipo ya indicado.

En segundo lugar otro de los aspectos a tener en cuenta es que hasta qué punto el consentimiento de la víctima es libre, no está viciado. Parece que las últimas reformas legislativas han atendido a la idea de que aquella ha de ser protegida aún en contra de su voluntad adoptando cuantas medidas se entiendan oportunas en fase de instrucción y consagrando la pena de alejamiento y prohibición de comunicación como de ineludible imposición cuando de uno de los delitos que estamos analizando se trata.

La voluntad de la denunciante puede no ser libre y si se adopta una visión amplia y generalizada del problema así puede verse. Puede no ser libre por haber sido sujeto pasivo de un maltrato físico y psíquico que le lleve a padecer el ya analizado síndrome de mujer maltratada, o haber entrado en lo que se conoce como la indefensión aprehendida. La mujer víctima de malos tratos continuados se ha “acostumbrado” a tal situación, no es capaz de ver dónde se encuentra la anormalidad de la conducta de su pareja, no lleva a cabo ningún tipo de actuación tendente a romper con ella y puede incluso llegar a sentirse destruida sin la presencia de aquel.

Puede que no sea libre porque esté condicionada por su entorno social y económico. Hemos visto cómo la violencia de género está dentro de la sociedad siendo aceptada por ésta como algo normal. SI bien es unánime la opinión de que no puede darse muerte a una mujer o causarle lesiones graves, no son tan reprochadas otras conductas que también son incardinables en este fenómeno. Cualquier Juez que trabaje en este foro puede señalar

cómo familiares y amigos aconsejan a las mujeres víctimas que “aguanten”, que “comprendan” que el alcohol o el trabajo u otros problemas, hacen que un hombre bueno se transforme, como les dice que “en todos los matrimonios hay problemas”, que el matrimonio es para toda la vida, y un largo etcétera de excusas para un comportamiento que no lo tiene. La mujer se ve presionada por ese entorno, comienza incluso a desarrollar una especie de culpabilidad por “hacer esto al padre de sus hijos”, “por haberle llevado a la cárcel”. LA falta de apoyo, de sensibilización, se hace más que patente en las instrucciones penales.

Puede que no sea libre porque junto a esa falta de apoyo social se encuentra, en numerosas ocasiones, en una más que precaria situación económica. No es inhabitual que las víctimas de violencia de género hayan visto cercenadas sus aspiraciones profesionales, su independencia económica. Es una forma más de aislar a la mujer, de hacerla “entender” que dependen de su maltratador, de evitar que tenga posibilidad alguna para relacionarse con un ambiente diferente y que le permita romper con esa enfermiza dependencia. No son suficientes los medios, las ayudas, y si lo fueran, lo que no lo es evidentemente son los procesos para concederlos.

La mujer pregunta al instructor del procedimiento si va a ser él quien le pague la hipoteca, quien dé de comer a sus hijos, quien pague los estudios, la luz, el agua,... Con la salida del domicilio familiar del que trae los ingresos, se va la fuente de ingresos. Habrá voces que indiquen que esto no es así porque la orden de protección permite fijar medidas civiles que atiendan a esas necesidades, pero esto es desconocer en el fondo el amplio abanico de supuestos que no se ven cubiertos por tal posibilidad. El maltratador, el agresor, deja de trabajar o lo hace en el mercado de la economía sumergida. Deja a la mujer sin su sustento. O bien lo que él percibe no es suficiente para el mantenimiento de dos núcleos familiares ya que a duras penas lo hacía para atender a la de uno solo. SE trata de pagar dos viviendas con lo que todo eso conlleva. En ocasiones por más que se quiera no se puede dividir lo que no exista.

Pero además no puede prolongarse la dependencia de la mujer una vez rota la relación. HA de procurarse por todos los medios que la mujer obtenga la anhelada libertad, la independencia en todos los ámbitos y por supuesto, la económica. Han de arbitrarse los medios para que, aunque el agresor no pueda o no quiera atender a sus obligaciones y con independencia de que esto le conlleve consecuencias, la mujer tenga sus necesidades y las de aquellos que de ella dependen, cubiertas.

Dicho todo lo anterior, si la mujer presenta síndrome de mujer maltratada, si carece de apoyo familiar, social e institucional, si carece de medios económicos, ya solo por ello, no puede hablarse de un consentimiento válido.

Es decir, entiendo que no cabe en modo alguno ese consentimiento, que no puede ser tenido en cuenta, y ello no solo en el ámbito de las medidas que se acuerdan en fase de instrucción sino también, y con más contundencia en el caso de que se impusiera la medida como pena en sentencia condenatoria.

Podría ser que ante la voluntad de la mujer, una vez que se haya constatado que ese consentimiento es válido, que no está viciado, puedan alzarse dichas medidas. Efectivamente la naturaleza de éstas, ya sean las dictadas al amparo del art. 13, del 544 bis o ya sean las del art. 544 ter, se trata en todo caso de medidas cautelares donde tienen que estar presentes los dos elementos tradicionales, la apariencia de buen derecho o *fumus bonis iuris* y el peligro derivado de la propia tardanza del procedimiento o *periculum in mora*.

Con el consentimiento podría llegar a entenderse que quiebra uno de esos dos principios y por tanto podría alzarse la medida.

Pero si se trata de una pena no cabe el razonamiento anterior. Curiosamente en este punto no existe la misma controversia, y digo curiosamente porque el delito del art. 468 del Código Penal o la agravación específica en los tipos penales no distingue entre pena y medida cautelar.

En todo caso no puede dejarse en manos de la víctima la efectividad de las penas, el cumplimiento y acatamiento de los fallos judiciales, máxime si según el art. 130 y siguientes del Código Penal establecen el perdón como causa de extinción de la responsabilidad criminal en los casos en que la ley así lo prevea y no en todo caso.

El que la víctima desee que el agresor condenado no cumpla la pena no puede tener efecto, ya que en caso de reconocerlo también debería dejarse sin sanción el que el agresor se fugue de prisión cuando ésta ha sido impuesta en la misma sentencia que aquella.

Esto puede parecer baladí, pero no lo es si se parte de la idéntica naturaleza que a uno u otro quebrantamiento da el Código Penal en el art. 468 y siguientes del Código Penal. SI se entiende que una conducta ha de ser punible, por supuesto ha de entenderse que lo es la otra, y ello con independencia de que una vez manifestada la voluntad de la víctima de reanudar la convivencia, pueda alzarse la medida.

3.- La indefinición de la ley alcanza, no solo a las cuestiones procesales, sino a los tipos penales en concreto. Así, aún no existe tampoco unanimidad en qué ha de entenderse por menoscabo psíquico subsumible en el tipo del art. 153 del Código Penal. Mientras que un hematoma no ofrece dudas sobre que sí es un maltrato de obra, no ocurre otro tanto con la cuestión señalada. ¿La labilidad emocional y la ansiedad que presenta la víctima es un menoscabo psíquico o bien es un efecto de la propia tramitación excesivamente lenta y complicada del procedimiento? ¿La sensación de desorientación, el sentimiento de inferioridad, son en sí mismos menoscabos psíquicos o son efectos de un delito de lesiones psíquicas? De nuevo no hay respuesta general sino una casuística amplia. La situación se agrava ante la falta de medios personales en las oficinas Forenses, donde el funcionario médico está sometido a una importantísima presión por el propio volumen y carga de trabajo y la complejidad del mismo. LA ausencia de psiquiatras forenses en la sede judicial ha de ser también destacada.

4.- La tramitación de los procedimientos de violencia de género en el marco de las llamadas diligencias urgentes de juicio rápido. SI bien pueden considerarse como beneficiosas en cuanto a que solventan la situación evitando que la víctima tenga que pasar numerosas veces por las dependencias judiciales, se plantea la duda de si tras una coacción leve o una amenaza leve, no se estará encubriendo un delito de malos tratos psíquicos habituales. El que en las dependencias policiales se contara con especialistas en, al menos, psicología y/o asistencia social, permitiría que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se vieran auxiliados en la difícil tarea de determinar si unos hechos son tan solo subsumibles en un art. 171 ó 172, o por el contrario, el trasfondo es de mayor gravedad. Otro tanto ocurriría con las simples y residuales faltas de injurias y vejaciones leves, único ilícito de este tipo que queda en la violencia de género y es que no es difícil que una mujer que se ve sometida a insultos más que frecuentes, a “pequeñas” humillaciones, termine generando un proceso psíquico insano.

5.- La propia prohibición legal de la mediación en casos de violencia de género y la no incorporación en el Código Penal de lo dispuesto en el art. 1 de la LO 1/2004.

El hecho de que se exija en los tipos penales una conducta determinada, un elemento objetivo claro, y el requisito de la relación matrimonial o afectiva, ya extinta o ya vigente, conlleva a la consideración como violencia de género y a la tramitación por los cauces correspondientes, de situaciones que no lo son. La propia ley habla de subordinación, de predominio por el hecho de ser hombre sobre la mujer por el hecho de serlo. Pero no en toda agresión del art. 153 o en toda amenaza o coacción leve, está presente el elemento de subordinación, el sexismo al que aludimos. EN ocasiones las agresiones son mutuas, no unas de ataque y otras de defensa, sino que la pareja en condiciones de igualdad se golpean, se agrede o se amenaza. EN estos supuestos, para solucionar lo que en la mayoría de estos casos es una separación o un divorcio complicados, una ruptura problemática pero no

de tintes delictivos desde la perspectiva analizada, la mediación implicaría un beneficio más que deseable.

Este problema no se ha solucionado en la normativa gallega, que haciéndose eco de la estatal, con las modificaciones operadas en la ley gallega de 31 de mayo de 2001 de mediación, impide esta figura en su art. 8.4 en los casos en que esté implicada una mujer que sufriera o sufra violencia de género.

6.- Falta de medios materiales que garanticen la observancia de las normas de protección, la evidente insuficiencia de recursos humanos en Juzgados, Tribunales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que den la adecuada respuesta, cada uno en su ámbito competencial al difícil problema que plantea la violencia de género, el escaso número de casas y pisos de acogida, la complicada y excesivamente lenta tramitación burocrática de ayudas, subvenciones y demás medidas asistenciales que prevé la ley, y un largo etcétera de cuestiones que dificultan la lucha contra la violencia de género.

Las medidas penales y judiciales no pueden verse como la única solución, ni siquiera como la más importante. Educación, medios de comunicación, concienciación de todos los agentes sociales que entran de un modo u otro en el panorama analizado, control de publicidad y proscripción de cualquier tipo de atentado al principio de igualdad, son objetivos a cumplir en el combate contra la lacra de la violencia sexista, que en pocas ocasiones son alcanzados.

V. LEY 11/2007, DE 27 DE JULIO, LEY GALLEGA PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Entrando ya en el último apartado de este artículo, y que constituye realmente el objeto primordial del mismo, la ley gallega alude en su preámbulo que se hacía necesaria una ley multidisciplinar, un “marco normativo propio y completo” que diera cumplimiento a lo dispuesto en el art 4 del Estatuto

de Autonomía para Galicia (que dispone que corresponde a los poderes públicos gallegos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas...) y que se habían visto insuficiente la previsión que se contenía en la Ley gallega 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y hombres, en materia de violencia de género. Busca la nueva normativa centrar en la prevención el pilar básico de la acción administrativa en esta materia. En los propios términos “con la presente ley se pretende dotar a los poderes públicos y a la sociedad gallega de un instrumento apropiado para prever, tratar y erradicar la violencia de género y, al fin, conseguir una verdadera realización del principio de igualdad”.

Son aspectos a destacar de esta ley que le diferencian de la normativa estatal los siguientes.

En primer lugar el propio objeto de la ley, mucho más amplio que el estatal, al disponer el art. 1. 2. “a los efectos de la presente ley, se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o privada”.

En consonancia con lo anterior, incluye en las formas de la violencia de género la física, la psicológica, la económica, la sexual, el acoso sexual, el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación y cualquier otra forma de violencia recogida en los tratados internacionales que lesiones o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres.

No se centra, como expresamente dispone el art. 3 de la ley en la relación de afectividad como hace la ley integral estatal sino en la situación de desigualdad.

Da un paso más la ley gallega que la estatal en cuanto a las formas de acreditación de la situación de violencia de género,

lo que tiene una extraordinaria importancia a la hora de obtener los recursos que el Estado, las Comunidades Autónomas, demás entes y organismos públicos y privados otorgan. Y es que la ley gallega no se centra en la judicialización del fenómeno. La víctima de violencia de género ya no se ve “obligada” a acudir a la administración de justicia para tener protección social, económica y/o administrativa. Expresamente el art. 5 prevé que la situación de violencia puede acreditarse por cualquiera de las siguientes formas:

- a) Certificación de la orden de protección o de la medida cautelar, o testimonio o copia autenticada por la secretaria o el secretario judicial de la propia orden de protección o de la medida cautelar.
- b) Sentencia de cualquier orden jurisdiccional que declare que la mujer sufrió violencia en cualquiera de las modalidades definidas en la presente ley.
- c) Certificación y/o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración pública autonómica o local.
- d) Certificación de los servicios de acogida de la Administración pública autonómica o local.
- e) Informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de violencia.
- f) Informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.
- g) Cualesquiera otras que se establezcan reglamentariamente.

Así, pues, la mujer que ha sido sometida a violencia de género en una u otra forma, puede libremente acudir a las vías señaladas para obtener respuesta a la infinidad de problemas que se le plantean en la casi totalidad de las ocasiones.

La ley multidisciplinar gallega trata de establecer los medios o principios para poder darles solución.

Recoge en su Título I una serie de capítulos dedicados a la prevención de la violencia de género, medidas de sensibiliza-

ción como campañas al efecto, un adecuado tratamiento de las noticias y publicidad en los medios de comunicación y el apoyo a los movimientos asociativos.

Este es uno de los grandes caballos de batalla. Cuando la vida, libertad, seguridad, salud y dignidad de una mujer se trata en un Juzgado o Tribunal, implica necesariamente que la lesión a sus más fundamentales derechos y libertades ya se ha producido. La vía penal no es la solución, ni siquiera remedio. Se hace preciso una lucha contra la violencia de género desde sus comienzos, cuando en los medios de comunicación se banaliza la cuestión, cuando el tratamiento es de todo punto inadecuado, cuando la publicidad minusvalora a la mujer por el mero hecho de serlo.

No olvida la ley el papel esencial que han tenido organizaciones y asociaciones cuando el Estado y los Poderes Públicos “privatizaban” la violencia de género, cuando no le daban el tratamiento de problema de salud pública, de atentado a los más básicos principios de un Estado Social y Democrático de Derecho, a la violencia de género.

Las medidas de investigación y de formación en materia de violencia de género que contiene el capítulo II de este Título, al igual que las anteriores, van destinadas a combatirla desde sus orígenes, tratando de impedir su aparición y formando a los agentes sociales que intervienen en la misma.

Otro tanto ocurre con las medidas en el ámbito educativo del capítulo III. No solo trata de la educación de todos los niños y niñas en igualdad, sino que prevé la solución para uno de los problemas que se planteaban de manera más que frecuente: la escolarización inmediata en caso de violencia de género de los menores afectados por cambios de centro derivados de situaciones de este tipo.

No puede perderse de vista que ha de evitarse a toda costa la victimización secundaria. Esto es, que la mujer víctima de violencia de género acarree una vez denunciada la situación con una serie de dificultades que le impiden la normalización de su vida diaria. La existencia de hijos en una pareja que se ve afecta

por una medida cautelar, el traslado de una mujer de domicilio, ciudad o incluso provincia, implica para aquellos un cambio de centro escolar. La ley prevé la solución imponiendo la escolarización inmediata.

En el Título II la ley ya parte del supuesto de que se ha producido la violencia de género y fija medidas de protección y asistencia. Merecen un análisis singular:

Capítulo I: Medidas en el ámbito sanitario y psicológico. Da a la atención sanitaria carácter de gratuita y preferente, configurando a la atención psicológica como un servicio de atención primaria que será gratuita en el momento inicial y en su seguimiento, derecho que se reconoce a la propia víctima como a los menores o personas que dependan de aquella.

Capítulo II: Medidas en el ámbito judicial.

Aquí hemos de diferenciar dos grandes grupos de normas.

Las primeras son las atinentes a la atención y asistencia letrada y jurídica a las víctimas de violencia de género. Se prevé un servicio de atención jurídica permanente, con profesionales especializados, imponiendo tal especificación como requisito para la adscripción a esos servicios. Los cursos de formación no solo se prevén como iniciales para la adscripción sino también de perfeccionamiento, debiendo la Xunta asumir o garantizar la formación de letrados y procuradores.

Las segundas son normas controvertidas y más que cuestionables para la doctrina más autorizada y es que aluden al ejercicio de la acción popular por parte de la Administración de la Xunta y su personación en los procedimientos penales por causas de violencia de género. Y es que carece la Comunidad Autónoma de ámbito competencial para dictar normas procesales, ya que esto está vedado por el reparto de competencias que efectúa la propia Constitución.

El capítulo III recoge bajo la rúbrica de “otras medidas de apoyo y protección” prevé la ley los dispositivos de alarma en

los casos de violencia de género y los programas de intervención con hombres en relación con la violencia de género. Si bien en un principio pudiera parecer que los programas de reeducación nada o poco tienen que ver con las medidas de apoyo y protección a las víctimas de violencia de género, nada más alejado de la realidad. Si es acertado fomentar la educación de los niños y jóvenes sobre los principios de igualdad de sexo para evitar en la medida de lo posible la violencia sexista, una vez que se ha “detectado” un autor de estos delitos, ha de ser tratado, ha de incidirse en el sexismo como pilar a destruir para que caiga la propia base de la violencia de género.

De la misma forma que en el Código Penal se prevé el tratamiento como *condictio sine qua non* para la suspensión de la privación de libertad como pena, la ley gallega prevé la reeducación como medida que pueden instar los propios agresores.

El capítulo IV fija las medidas que traten de paliar los efectos negativos de la violencia de género en el ámbito laboral y formativo de las mujeres que lo padecen. Las considera como un colectivo preferente en el establecimiento de ayudas y subvenciones a las empresas que las contraten y a ellas mismas, para los programas de formación profesional, ocupacional y continua.

Establece además los llamados planes de igualdad entre las empresas para mejorar la situación de las mujeres víctimas de la violencia de género a lo largo de los procesos de selección, contratación, promoción profesional, prevención de la violencia y conciliación de la vida personal, familiar y profesional.

Son de una importancia vital las circunstancias relatadas. Nótese que cuando una mujer ha sido víctima de violencia de género, lo ha sido en la mayor parte de los casos de una de sus manifestaciones, que si bien no prevé la ley estatal sí lo hace la ley gallega: la violencia económica. El agresor ha cercenado toda posibilidad de la mujer para obtener una posición laboral y formativa que le permita obtener el ámbito de autonomía de la que él no considera merecedora por el hecho de ser mujer. La víctima, una vez roto el vínculo, dado el paso para poner fin a la

situación, se encuentra sin recursos económicos, aislada social y laboralmente y sin que su estado anímico favorezca en modo alguno a su estado. Por ello, la ley, los poderes públicos y los agentes sociales han de incidir en este punto. No son pocos los supuestos en los que las mujeres deciden dar marcha atrás en su correcta decisión de apartarse de sus agresores porque no tienen “donde ir” ni “de qué vivir”, utilizando sus propias palabras, o lo que es lo mismo sabiendo que “al menos él pagará la hipoteca y dará de comer a los niños”. Escuchar estas palabras en una mujer cuya seguridad, integridad, salud y libertad, cuando no vida, se ha visto fuertemente atacada, hacen que se plantee la duda de si era en la Constitución donde se reconocía el derecho a una vivienda digna y al trabajo. Una vez que la mujer tiene conciencia de que tiene medios para salir adelante, que va a encontrar o ha encontrado ya trabajo, comienza a romper los vínculos y lazos de dependencia que le unen al agresor. Si los afectivos y psicológicos dependen de su propio esfuerzo, compete a las administraciones hacer lo propio con aquellos otros que estén a su alcance.

El mismo fin o principio guía las medidas de carácter económico que regula el capítulo V: prestaciones periódicas, la renta de integración social de Galicia y un procedimiento abreviado para su obtención, ayudas escolares y el llamado Fondo Gallego de Garantía de Indemnizaciones atienden a esas necesidades crematísticas, a la evitación de la victimización secundaria de la mujer que además de haber visto su entorno más conocido por doloroso que fuera destruido, se ve sin salidas económicas.

Pero además de las específicas en lo pecuniario, se reconoce el derecho a la vivienda, dando a estas víctimas acceso prioritario a las viviendas de promoción pública y reconociendo los llamados equipamientos sociales especializados.

Este último aspecto también tiene una importante trascendencia práctica. LA mujer víctima de violencia de género tiene derecho, como veremos después, a acceder a la red de casas y viviendas de acogida, pero éstas están sometidas a unas normas que conllevan que con las mujeres puedan vivir los menores pero

no los mayores dependientes. La responsabilidad de la mujer con éstos, la preocupación de qué será de su vida y cuidados se ve paliada, de llevarse a efecto, con este equipamiento social especializado (ej., residencias para la tercera edad y centros de día).

En el título III dentro del epígrafe de “organización del sistema de protección y asistencia integral especializada frente a la violencia de género” se recogen una serie de preceptos tendentes a materializar la nueva situación de la mujer víctima de violencia de género.

Así se trata, como se indica expresamente en el art. 47, de aportar la ayuda y asistencia directa a las mujeres y las personas de ellas dependientes. SE dibuja un organigrama asistencial.

En este se encuentra la red gallega de acogida para las mujeres y los menores a su cargo.

Esta limitación a los menores plantea serios problemas en la realidad, ya que la dependencia no puede circunscribirse a menores de edad. En más de una ocasión la mujer tiene hijos que aún están estudiando a pesar de su mayoría de edad, que carecen de ingresos propios, de posibilidades de subvenirse sus propias necesidades. Conforme a tal precepto este grupo de personas quedaría en situación un tanto anómala, con un progenitor, por ejemplo, imputado y su madre en una casa de acogida con la que no pueden convivir en el centro.

Por ende, también ha de plantearse la cuestión, de nuevo de los ancianos o de adultos que por una u otra razón, dependen de la mujer. Se plantea si el ingreso en los centros residenciales de estas personas va a tener un carácter tan rápido e inmediato como el de las mujeres en el centro de acogida.

Sólo la práctica dará respuesta. Por el momento el panorama no es excesivamente alentador.

Por el contrario es muy beneficioso el hecho de que para poder ingresar en tales centros baste cualquiera de los medios establecidos en el art. 5 de la ley, es decir, que no sea exigible la interposición de denuncia.

Como conclusión de todo lo indicado anteriormente puede decirse que por problemas que se planteen en la práctica, por deficiencias que planteen todas las leyes y disposiciones que lo desarrollen, se han dado numerosos pasos en la lucha contra esta lacra, pasos que han llevado a que se empiece a tomar conciencia del fenómeno por prácticamente todos los sectores y agentes sociales. Ya es mucho lo que se ha avanzado. Hemos de ser optimistas, por tanto, en el análisis y esperar que el camino iniciado no se interrumpa aquí, sino que sea el principio del fin.